

653.ª SESIÓN*Martes 29 de mayo de 1962, a las 10 horas**Presidente : Sr. Radhabinod PAL***Derecho de los tratados**
(A/CN.4/144 y Add.1) (continuación)**[Tema 1 del programa]****ARTÍCULO 17 (PODER PARA FORMULAR Y RETIRAR RESERVAS); ARTÍCULO 18 (EL CONSENTIMIENTO A LAS RESERVAS Y SUS EFECTOS); ARTÍCULO 19 (LA OBJECCIÓN A LAS RESERVAS Y SUS EFECTOS) [continuación]**

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir su examen de los tres artículos sobre las reservas.

2. Hablando en calidad de miembro de la Comisión, dice que los principales puntos de desacuerdo entre los miembros de la Comisión se refieren a lo que se llama el principio de la integridad del tratado y a la oportunidad de volver a la doctrina tradicional que parecía haber sido generalmente aceptada, por lo menos hasta 1951. Así, Lord McNair pudo decir en 1938 que a menudo se ha llevado demasiado lejos la analogía entre los tratados internacionales y los contratos de derecho privado, pero al resolver los problemas que en la práctica plantea la formulación de reservas a la firma o ratificación de los tratados, se ha descubierto que esa analogía es útil¹. Lord McNair llega incluso a comparar las reservas a las contraofertas de los sistemas jurídicos internos: las cláusulas del tratado son una oferta a las partes para que las acepten; el Estado que formula la reserva no las acepta, sino que hace una contraoferta a los demás participantes para su aceptación. El resultado de la reserva dependerá por tanto de la manera en que las partes reciban la contraoferta. Esta parece haber sido la opinión general que prevalecía, y una opinión similar admitía la Comisión en 1951, como lo demuestra el memorando que entonces presentó el Sr. Amado².

3. Sin embargo, como el Relator Especial indica en su comentario, la Asamblea General no aceptó ese principio a pesar de la recomendación de la Comisión y la Corte Internacional de Justicia, en el caso de las reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, rehusó también aceptar la llamada doctrina tradicional transformada en norma de derecho. En vista de esa opinión, de la práctica de los Estados y de los debates de la Asamblea General sobre la recomendación que la Comisión formuló en 1951, no cree que la vuelta al principio de la unanimidad sea compatible con el desarrollo progresivo del derecho internacional.

4. Está casi totalmente de acuerdo con el Relator Especial a propósito de la formulación de los principios en que se basan los tres artículos sobre reservas. La redacción del texto propiamente dicho puede dejarse al Comité de Redacción; la Comisión debe ocuparse únicamente de mejorar la exposición de los principios fundamentales.

5. Está de acuerdo con el Relator Especial y con otros miembros de la Comisión en que, siguiendo la opinión de la Corte Internacional de Justicia, se acepte el criterio de la compatibilidad de las reservas con el objeto y finalidad del tratado, aun cuando ello no constituya un verdadero principio orientador. El Sr. Rosenne ha sugerido que se aplique también el criterio de la compatibilidad en los artículos 18 y 19. Eso limitaría las objeciones, que al fin se podrían formular basándose únicamente en la incompatibilidad de la reserva con el objeto y finalidad del tratado; si se aprobase la sugestión del Sr. Rosenne, la cuestión del consentimiento perdería importancia. Sin embargo, incluso en tal caso, seguiría siendo necesario el artículo 18. Si sólo se pudieran hacer objeciones a una reserva basándose en su incompatibilidad con el objeto del tratado, las objeciones no tendrían consecuencias jurídicas y las partes tendrían que correr el riesgo correspondiente, como el Relator Especial señala en el párrafo 4 del comentario. Aunque puede parecer que la cuestión del consentimiento no es pertinente, hay que tener en cuenta que el principio enunciado en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 17 sigue en pie; según esa disposición, aunque la reserva esté expresamente prohibida o implícitamente excluida con arreglo a las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 del mismo artículo, será admisible si ha obtenido el consentimiento de las partes. El artículo 18 sigue siendo por tanto necesario, aun cuando se admita la sugestión del Sr. Rosenne respecto a la aplicación del criterio de la compatibilidad a las objeciones.

6. Algunos oradores han hecho hincapié en que no conviene fomentar las reservas. Aunque reconoce que sus observaciones tienen mucho peso y son atinadas, hace notar que en la actual situación internacional lo discreto es no cerrar la puerta a las reservas.

7. En vista del rápido desarrollo del regionalismo, y teniendo en cuenta que ese fenómeno no deja de tener sus inconvenientes en momentos en que el mundo debe esforzarse en encontrar una nueva unidad asentada sobre una base universal, es imprescindible dejar abierta la vía a una mayor participación de los Estados en medidas que aseguren una efectiva acción internacional en el seno de una organización mundial, en lugar de obligarles a buscar soluciones en grupos regionales. Tiene presentes, por supuesto, las razones fundamentales del establecimiento de grupos regionales y su importancia; los Estados de una región determinada pueden tener problemas e intereses comunes en los que no participa el resto del mundo; por consiguiente, para los miembros de esos grupos representa un incentivo trabajar juntos, especialmente si tienen historia o tradiciones comunes, lo cual les hace más fácil llegar a soluciones dentro de esa organización que en un grupo más heterogéneo. Ahora bien, teniendo en cuenta la abundancia y la complejidad de los problemas cuya

¹ *The Law of Treaties*, ed. 1938, pág. 105.

² *Year Book of the International Law Commission 1951*, N.º de venta: 57.V.6, vol. II, pág. 17 a 23.

solución sólo es posible en la esfera internacional, la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias imponen a todos los pueblos del mundo la obligación de edificar y de reorganizar la vida colectiva dentro de un marco mundial. Incluso en el campo tradicional de la responsabilidad del Estado, todos ellos tienen que reconocer que el cumplimiento efectivo de sus obligaciones depende de hechos que rebasan las fronteras. En el mundo moderno, la interdependencia a que han llegado los Estados no tiene precedentes, y cada vez se dan más casos de insuficiencia de los países aislados. En atención a ello, la propia Carta de las Naciones Unidas constituye un intento de solucionar los problemas internacionales en escala mundial. Son estas consideraciones las que la Comisión debe tener presentes para decidir en cada caso.

8. Los dos problemas fundamentales que quedan por solucionar son: primero, si el criterio de la compatibilidad con el objeto y finalidad del tratado ha de ser aplicable a las objeciones a las reservas y, segundo, si se debe aceptar, y en qué medida, el sistema interamericano que el Relator Especial ha incorporado a su proyecto.

9. El Sr. PESSOU dice que, aunque algunos oradores se han inclinado por la admisión del principio de la integridad del régimen jurídico del tratado, el proyecto de artículos debería contener una disposición que se apartase de dicho principio. Es evidente que la admisión de reservas a algunas disposiciones de un tratado puede frustrar el objeto mismo del tratado; el sistema de dar el consentimiento a un tratado y luego retirarlo por medios artificiales es comparable a la costumbre censurada en la vieja máxima del derecho interno francés que dice *donner et retenir ne vaut*. Ahora bien, no puede negarse que la formulación de reservas es admisible si éstas son compatibles con el objeto y finalidad del tratado.

10. Las reservas son admisibles únicamente a los tratados multilaterales, plurilaterales y colectivos, en los cuales la mayoría puede mitigar los efectos de la reserva. En el caso de los tratados bilaterales, en que las obligaciones asumidas por una parte están compensadas por las que asume la otra, una reserva equivaldría evidentemente a la negativa a ratificar.

11. En una sesión anterior, el Sr. Gros ha hecho hincapié en las dificultades que plantearía la diversidad de regímenes jurídicos dentro de un tratado, y ha manifestado que tal diversidad sería incompatible con la función unificadora de los tratados-ley. Personalmente, se atreve a sugerir que, en caso de que no pueda llegarse a un acuerdo sobre este particular, se dé una forma diferente a los artículos 17 y 18 empezando por enunciar en ellos el principio general de la integridad del tratado, y luego indicando la excepción que constituyen las reservas.

12. El Sr. LACHS dice que el Sr. Ago y el Sr. Briggs en particular han hecho notar algunos graves problemas que se refieren a la esencia misma de la cuestión que la Comisión examina. Desde que hace unos diez años se entabló la batalla a propósito de las reservas, se han empleado multitud de argumentos a favor y en contra

de esa institución. Además del de la integridad de los tratados, que ha utilizado el Sr. Gros, hay otros argumentos en contra de las reservas; se ha dicho que, teniendo en cuenta que el tratado es un acuerdo, hay que sopesar cuidadosamente los derechos y obligaciones que crea, con el fin de que la carga no sea mayor para unos Estados que para otros; se ha alegado también que las reservas constituyen un paso más en la negociación de un tratado, por lo que hay que consultar a todas partes; el Sr. Ago, a su vez, ha insistido en que las reservas se prestan a abusos y al goce injustificado de privilegios por algunos Estados.

13. Sin embargo, en su opinión, el examen de los argumentos expuestos demuestra que no son válidos; la institución de las reservas es hoy parte integrante del derecho internacional. Entre las características del mundo moderno están la gran variedad de los intereses de los Estados en los tratados que se conciertan y la extensión del derecho internacional a muchos nuevos campos. En consecuencia, siempre que hay más de dos partes en un tratado, los intereses pueden no ser idénticos. Además, en ciertos casos la adhesión sin reservas puede ser todavía menos útil que la adhesión con reservas; todo depende de la forma en que cada Estado piense contribuir al logro de los objetivos del tratado, puesto que algunos de ellos que se adhieren sin reserva la hacen por puro formulismo. Una disposición excesivamente rígida podría impedir que un Estado cuya participación en el tratado fuese de vital importancia llegase a ser parte en él, frustrando así su objeto mismo. Además, desde un punto de vista puramente teórico, la llamada regla de la unanimidad no es parte del derecho internacional; la Corte Internacional ha señalado acertadamente que el procedimiento estipulado en el informe que aprobó en 1927 el Consejo de la Sociedad de las Naciones, en el que se suscribía la regla de la integridad del tratado, constituía a lo sumo el punto de partida de una práctica administrativa³.

14. En vista de la gran diversidad de los intereses de los Estados, parece aconsejable dejarlos, en lo posible, en libertad de decidir la medida en que quedarán obligados por el tratado. Existe ciertamente el peligro de que se haga un uso abusivo de las reservas, pero el mismo argumento puede aplicarse a propósito de cualquier institución jurídica; en el otro extremo de la escala está el peligro contrario de la inacción y de adhesión puramente verbal al tratado. Por el temor a posibles abusos no se puede ignorar completamente el proceso histórico del acercamiento de las naciones.

15. La Comisión debe considerar con ecuanimidad todo el problema. Los intereses contrapuestos de los Estados que conciertan tratados no se pueden conciliar automáticamente mediante la aplicación de un principio de mayoría cuantitativa, porque la minoría no sólo es una noción cuantitativa, sino también cualitativa. En general, el Relator Especial ofrece una solución acertada y algunas garantías contra posibles abusos.

16. No está de acuerdo con los oradores que en la sesión anterior sugirieron la posibilidad de que la acep-

³ *Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion*: I.C.J. Reports 1951, pág. 25.

tación de las propuestas del Relator Especial pusiese en peligro todo el sistema de relaciones convencionales. A ese respecto no puede compartir la opinión del Sr. Ago: las reservas deben ser consideradas como el resultado de la evolución natural del derecho internacional y como un medio de lograr nuevas relaciones convencionales. En cuanto al temor del Sr. Briggs, de que el método propuesto en el informe del Relator Especial pueda dar una complejidad indebida a las relaciones convencionales, es un argumento que adujo el Gobierno del Reino Unido ante la Corte Internacional de Justicia en relación con el caso de las reservas a la Convención sobre Genocidio⁴. Pero en la aplicación práctica de un tratado puede haber esas consecuencias incluso sin que existan reservas; la interdependencia entre derechos y obligaciones se establece al entrar el tratado en contacto con la realidad. Es posible que algunas de sus cláusulas se conviertan en letra muerta, y que otras adquieran una importancia cada vez mayor a causa del interés que ofrezcan determinadas disposiciones para los diversos Estados. Sería casi imposible expresar en puras fórmulas los matices de ese complicado sistema de relaciones.

17. Teniendo en cuenta la aplicación práctica de la institución de las reservas, se llega inevitablemente a la conclusión de que hay que enfocarla con un criterio más amplio. Durante 25 años por lo menos, muchos autores se han manifestado en general en contra de la institución y a favor del principio de la unanimidad, a pesar de lo cual se formularon centenares de reservas a los tratados concertados con los auspicios de la Sociedad de las Naciones. Las reservas han llegado a ocupar por tanto un lugar concreto y legítimo en las relaciones internacionales. En el pasado decenio muchos autores han cambiado su opinión sobre el asunto. La práctica ha prevalecido por tanto sobre la teoría, como el Relator Especial indica tan acertadamente en su informe.

18. El Sr. TUNKIN, contestando a los argumentos expuestos en el seno de la Comisión contra la institución de las reservas, dijo que el Sr. Gros ha dicho que las reservas destruyen la integridad del régimen jurídico establecido por los tratados haciéndolos inaplicables a todas las partes, mientras que el Sr. Ago ha asegurado que las reservas harían ilusoria la universalidad, sugiriendo además que convendría señalar a la atención de los Estados el peligro que las reservas representan. Reconoce que la costumbre de formular reservas no deja de ofrecer ciertos peligros, pero eso puede decirse de casi todo en el mundo. Teóricamente, hay algunas que pueden apartarse del objeto mismo del tratado, pero sería desacertado señalar a los Estados el peligro que representan las reservas sin exponer al mismo tiempo las ventajas de la institución. Lo mejor a su juicio sería dejar a los Estados que decidiesen por sí mismos, tanto más cuanto que los demás Estados interesados en un tratado están en libertad de admitir las reservas o de oponerse a ellas si no son compatibles con el objeto y finalidad del tratado.

⁴ *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Declaraciones escritas, 1951, 51/0, pág. 58.

19. Si existiese un régimen uniforme aplicable a los tratados, si el objetivo principal de la Comisión fuese la *elegantia juris* y si ésta desease adherirse al principio *vivat justitia pereat mundus*, las reservas serían incompatibles con tal sistema a causa de su rigidez. Ahora bien, la Comisión no debe adoptar soluciones excesivamente teóricas sino tener siempre presente la relación del derecho con la realidad y considerar los efectos de la ley únicamente en función de la realidad.

20. Se ha expresado también la opinión de que los artículos no deben fomentar las reservas. Si bien teóricamente está de acuerdo, preferiría que se enfocase el problema de modo más completo. Una reserva es la reacción del Estado cuando considera que no puede participar en un tratado sin formularla. Lo ideal sería, naturalmente, que nunca hubiese reservas a los tratados, pero el único medio de lograrlo es hacer lo posible durante las negociaciones para lograr un texto que acepten todos los Estados interesados; procurando que las conferencias establezcan los tratados en términos universalmente aceptables se reducirá el número de reservas.

21. Algunos de los miembros de la Comisión confunden al parecer el problema de las reservas específicas con el de las reservas como institución de derecho internacional. Las reservas específicas pueden ser inocuas o perjudiciales; por ejemplo, las que formuló el Reino Unido en su nota de 19 de mayo de 1928, relacionando el Pacto Briand-Kellogg con el artículo 1 del Tratado General sobre la Renuncia a la Guerra⁵ limitaron la eficacia de las disposiciones de ese importantísimo tratado internacional, por lo que fundamentalmente fueron perjudiciales.

22. Se ha señalado ya que la institución de las reservas ofrece la posibilidad de participación de un mayor número de Estados en los tratados y que, como ha dicho el Sr. Lachs, es el resultado de la moderna evolución en materia de tratados. La experiencia demuestra, en el caso de las conferencias plenipotenciarias, que, incluso contando con la buena voluntad de todas las partes, la limitación del tiempo impide a menudo a los participantes lograr resultados aceptables si no se permite formular reservas a todos los Estados interesados. Siendo ésa la realidad, no puede decirse que sea aconsejable un sistema que excluyese automáticamente de la participación en el tratado a un número de Estados que podría ser considerable. Además, el excluir deliberadamente a ciertos Estados de la participación en tratados importantes para toda la comunidad internacional no estaría de conformidad con el espíritu del derecho internacional moderno que estimula la colaboración entre los Estados.

23. Puede decirse por tanto en conclusión, que la institución de las reservas sirve a un propósito útil como medio práctico de estimular la cooperación internacional. Además, se trata de una institución indispensable actualmente en la práctica porque las reservas se refieren por lo general a disposiciones del tratado que son relativamente de poca importancia; si fuesen incompatibles con el objeto y finalidad del tratado, las demás partes estarían en libertad de rechazarlas.

⁵ *League of Nations Treaty Series*, vol. XCIV, pág. 57.

24. El Sr. Briggs ha sugerido que la regla de los dos tercios o de otra mayoría, que se aplica para la aprobación del texto de un tratado, sea aplicable también al procedimiento para aceptar o rechazar reservas y que, si la mayoría estipulada acepta la reserva, el tratado sea obligatorio para todas las partes. A este respecto desea suscitar una cuestión teórica. La concertación de tratados es un proceso compuesto de actos consecutivos, pero las reservas aparecen una vez que ha terminado el proceso necesario para llegar a un acuerdo, es decir, cuando el texto ya es definitivo y no se lo puede alterar por el procedimiento ordinario de negociación. Las reservas representan por lo tanto una especie de desviación de la línea seguida en la elaboración del tratado y, sin embargo, representan también en cierto modo la coordinación de la voluntad de los Estados, ya que no se las puede imponer a ninguna parte en el tratado.

25. Está de acuerdo con la opinión de que las reservas son una especie de oferta que hace el Estado que las formula y que las demás partes pueden, en ejercicio de su soberanía, aceptar o rechazar libremente. Así pues, la sugestión del Sr. Briggs de que la admisibilidad de reservas se rija por la regla de la mayoría no es practicable evidentemente y además destruiría la esencia misma de las reservas puesto que éstas se caracterizan especialmente por constituir una desviación del proceso continuo de la elaboración del tratado.

26. Encuentra en general aceptables las disposiciones propuestas por el Relator Especial, que parecen constituir el único punto de partida para que los Estados lleguen a un acuerdo en el momento presente; cualesquiera disposiciones que excluyesen las reservas por completo serían inaceptables para gran número de Estados. A su juicio, convendría enunciar tres principios en el proyecto de artículos. En primer lugar, los Estados están en libertad de formular reservas, salvo que el tratado las prohíba o las limite expresamente. Segundo, por lo que respecta al criterio de compatibilidad, está de acuerdo con el Sr. Rosenne en que si se lo ha de aplicar a las reservas, habrá que aplicarlo también al consentimiento y a las objeciones a las reservas. Tercero, si se admite una reserva, el tratado deberá estar en vigor entre el Estado que la formuló y las partes que la admitieron, con la excepción del artículo o artículos a que se refiere la reserva. Por otra parte, si un Estado se opone a una reserva parece prematuro deducir que automáticamente dicho Estado no quedará obligado por el tratado en relación con el Estado que formuló la reserva. Debe ser el Estado que se opone quien saque sus propias conclusiones al efecto; la finalidad de su oposición puede ser simplemente manifestar su parecer y no suspender sus relaciones convencionales con el Estado que formula la reserva. Conviene por tanto que sean los Estados que se oponen quienes decidan por sí mismos si sus objeciones han de tener o no esas consecuencias extremas.

27. El Sr. ROSENNE dice que desea aclarar su opinión acerca del papel que desempeña el criterio de la compatibilidad en la institución de las reservas y en la regla supletoria que la Comisión está redactando. Le han sorprendido las palabras del Presidente a propósito de una pretendida disensión entre los miembros de la

Comisión a este respecto. Si ha entendido correctamente, el propósito que persigue el Relator Especial en el texto del apartado a) del párrafo 2 del artículo 17, en el comentario correspondiente y en su introducción a los artículos sobre reservas, el criterio de compatibilidad expresado en esa disposición constituye una especie de orientación general pero no es suficiente por sí solo; para determinar el derecho efectivamente aplicable en la materia, los criterios objetivos siguen siendo el consentimiento y las objeciones.

28. La combinación del principio general con esos criterios objetivos le parece que sería el modo correcto de enfocar el asunto y facilitaría la solución adecuada del problema; pero por eso precisamente piensa que sería también acertado aplicar el mismo criterio explícitamente en el artículo 19 y no darlo como cosa implícita como parece hacerlo el Relator Especial en su informe. Como la Corte Internacional ha declarado en su respuesta a la pregunta II cuando emitió su opinión consultiva acerca de las reservas a la Convención sobre Genocidio, los Estados contratantes, en materia de objeciones a las reservas, tienen el deber común de juzgar guiándose por la compatibilidad o incompatibilidad de la reserva con el objeto y finalidad de la Convención.

29. En el curso del debate se ha hecho referencia a un problema filosófico al preguntar si el régimen jurídico resultante de una convención multilateral es en realidad una serie de relaciones bilaterales o bien algo más complejo. Ni la Comisión con sus veinticinco miembros ni cualquier otro grupo de juriconsultos podrán jamás llegar a un acuerdo sobre ese particular, y duda de que la cuestión sea pertinente cuando se trata de establecer una regla supletoria para aquellos casos en que el tratado de admisibilidad de reservas. Desde un punto de vista práctico lo importante es que cada Estado sepa cuáles son sus relaciones convencionales con otros Estados, de forma que el tratado no quede despojado de su eficacia material. Un documento publicado por las Naciones Unidas sobre la situación jurídica de las convenciones multilaterales en las que actúa como depositario el Secretario General (ST/LEG/3/Rev.1), revela claramente cuál es la situación por lo que respecta a esa categoría de tratados.

30. En cuanto a la teoría de la integridad, que encuentra algo difícil de entender, el Relator Especial ha señalado acertadamente en el párrafo 7 del comentario correspondiente que es fácil exagerar los efectos perjudiciales de las reservas para la integridad del tratado. El problema existe, pero la Comisión no debe por ello abstenerse de preparar normas aplicables y que se ajusten a las necesidades actuales. Como ha dicho el Sr. Tunkin, quizá entrañe un peligro real el intentar especificar demasiado acerca de las últimas consecuencias de una objeción. La costumbre establecida desde 1951 indica que los Estados que se oponen a una reserva no suelen entender que ello entrañe la negativa a entrar en relaciones convencionales con el Estado que la formuló. En esta materia está dispuesto a aceptar el tenor general del proyecto del Relator Especial y no cree que pueda importunar a los Estados que no desean sacar todas las conclusiones de una objeción formal a una reserva hecha por otro Estado.

31. El Sr. AGO dice que, aunque en general la Comisión parece dispuesta a aceptar las propuestas del Relator Especial y suscribir sus conclusiones, en el debate se ha deslizado un elemento de controversia que puede dar la impresión de que subsisten ciertas serias dudas en cuanto al fondo. En algunos casos se ha sacado de un contexto general parte de un argumento con el fin de refutar algo que nadie había dicho. Por ejemplo, él nunca ha pretendido que se prohíban las reservas a los tratados. La práctica demuestra con toda evidencia que son necesarias y que nada se ganaría ignorando las realidades de la vida internacional; lo que ha dicho es que si se permitiesen las reservas sin limitación alguna, éstas podrían anular totalmente los efectos de un tratado y el progreso de la codificación del derecho internacional. Algunos oradores han descrito elocuentemente las ventajas de las reservas, pero personalmente prefiere enfocar el asunto partiendo de la necesidad de garantizar el propósito efectivo de los tratados.

32. Es indudable que la institución de las reservas existe. Lo que hay realmente que determinar en los proyectos de la Comisión es en qué circunstancias pueden ser admisibles. Si bien está de acuerdo en que las reservas son indispensable debido a la imposibilidad de conseguir rápidamente la aceptación universal de principios generales, no puede desde luego admitir que las reservas *per se* representen un paso adelante en el desarrollo del derecho internacional.

33. Aunque es cierto, como ha dicho el Sr. Tunkin, que la posibilidad de hacer reservas podría atraer más partes a un tratado, esa ventaja quedaría anulada totalmente si las reservas destruyesen la esencia del tratado mismo. La premisa es por tanto exacta sólo hasta cierto punto, porque a menos que se mantenga el carácter esencial del tratado, la participación extensa perderá toda su importancia.

34. El criterio del Relator Especial de que las reservas han de ser compatibles con el objeto y propósito del tratado podría plantear dificultades prácticas de interpretación. Como ha señalado el Sr. Tunkin, la situación está clara cuando el tratado mismo determina, como debe hacerlo efectivamente, cuáles de sus disposiciones son esenciales hasta el punto de que no admiten una reserva y cuáles son las que no tienen ese carácter; pero las dudas se pueden plantear cuando el tratado no dice nada sobre el particular, ya sea por no haberse examinado la cuestión de las reservas durante las negociaciones o porque los Estados interesados no hayan conseguido llegar a un acuerdo acerca de la cláusula sobre reservas.

35. Por lo que respecta a los efectos de las reservas, ha llegado como el Sr. Tunkin a la conclusión de que el tratado queda en vigor entre el Estado que formula la reserva y el que la acepta, excepto las disposiciones del mismo a que se refiere la reserva, que no tendrán efectividad entre ellos.

36. Sin embargo, piensa que, a falta de disposiciones pertinentes en el tratado, el criterio para determinar la admisibilidad de las reservas es la intención colectiva, como contrapuesta a la individual, de las partes en el momento de redactarlo, y no podía aceptar la conclu-

sión del Sr. Tunkin de que la decisión final sobre la admisibilidad de una reserva debe dejarse a cada Estado individual. Tampoco cree que no sea necesario que el Estado que se opone a una reserva especifique si su oposición entraña la negativa a entablar relaciones convencionales con el Estado que formuló la reserva. Ese elemento de incertidumbre no sería conveniente, y, aunque la Comisión no tiene por tarea dar consejos paternales a los Estados, siempre que sea posible debe formular reglas claras y precisas. Un sistema en el que cualquier Estado pudiera hacer cualquier reserva a cualesquiera cláusulas de un tratado, y en el que las partes estuvieran en libertad de aceptarla o de oponerse sin indicar las consecuencias de su oposición, conduciría a una situación en que *fiat apparentia juris pereant jus et mundus*.

37. El Sr. VERDROSS dice que, aunque a primera vista hay una gran diferencia de opiniones entre el Sr. Tunkin y el Sr. Ago, ambos están de acuerdo en que todo depende de la voluntad común de las partes. Cuando no existe una autoridad supranacional, la cuestión de la compatibilidad de la reserva con el objeto del tratado es tarea que incumbe a las partes, pues es poco probable que tal decisión pueda ser confiada al Secretario General de las Naciones Unidas.

38. El Sr. TUNKIN dice en respuesta a la observación del Sr. Ago, que, aunque las reservas no se pueden considerar *per se* como un adelanto, tampoco cabe separarlas del contexto del tratado mismo. Si se las enfoca de esa manera se reconocerá que son una institución útil.

39. Está de acuerdo con el Sr. Ago en que lo fundamental del problema es el requisito de que la reserva sea compatible con el objeto y propósito del tratado; la Comisión puede, ya sea tratar de formular una regla a ese respecto o dejar la decisión a los Estados interesados.

40. El Sr. Ago ha sugerido que cuando el tratado no dice nada sobre el particular, se puede asumir que las partes se oponen a las reservas o, por lo menos, que no las consideran admisibles a todos los artículos. Personalmente cree más bien que si el tratado no dispone nada es difícil sacar conclusión alguna respecto a la intención de las partes y será preferible dejar que éstas decidan si aceptan o rechazan la reserva.

41. En la práctica, hay pocos casos en que las reservas sean de tal naturaleza o tan numerosas que menoscaben el carácter universal de un tratado multilateral. No puede establecerse una regla basándose en raras excepciones.

42. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, dice que como la causa en cuestión sólo se refiere a casos en que el tratado guarda silencio sobre ese punto, los futuros negociadores de tratados serán suficientemente advertidos, cuando ya hayan aceptado la Convención, de que deben arreglar esta cuestión con especial cuidado. La única dificultad puede surgir en relación con tratados ya concluidos si la cláusula tiene que ser en algún sentido retroactiva; de lo contrario, la cuestión de las reservas en lo que concierne

a estos tratados habrá que resolverla estableciendo ciertas presunciones de conformidad con el derecho que estaba vigente en el momento en que se concertó el tratado. Si cabe presumir que la intención de las partes fue permitir únicamente las reservas expresamente autorizadas, el silencio del tratado se debe interpretar en el sentido de que ninguna reserva es admisible. Si la Comisión logra redactar una norma precisa sobre reservas y si los Estados aprueban finalmente los artículos que ella prepare, es de suponer que nunca más se plantearán las dificultades emanadas de la no inclusión en los tratados de disposiciones relativas a reservas. En los casos de genocidio, la presunción fundada en el silencio del texto ha sido también tratada y la Corte opina que la ausencia de una cláusula especial referente a las reservas no excluye necesariamente la posibilidad de hacer reservas ⁶.

43. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que el examen de los artículos 17, 18 y 19 se ha referido en gran parte al caso de que un Estado formule una reserva que esté en contraposición con el objeto y finalidad del tratado. Se debe dedicar atención más bien al caso de que un Estado formule una reserva y otro Estado o Estados la acepten. Es evidente que, para tener algún efecto jurídico, la reserva ha de ser aceptada por otros Estados. Se ha invocado el principio *pacta sunt servanda*, pero este principio quiere decir sin duda que lo que los Estados acuerdan constituye ley. Si un Estado formula una reserva y otro la acepta, el principio significa precisamente que esos dos Estados han entablado relaciones convencionales.

44. Los dos Estados interesados podrían perfectamente haber formulado su acuerdo como un tratado bilateral. No comprende en qué podría basarse un tercer Estado para impedir a los dos Estados interesados entablar las mismas relaciones jurídicas en un tratado multilateral. La libertad es lo que debe constituir la regla supletoria a ese respecto. La aplicación de dicha regla sería compatible con el sistema que ha venido siguiendo desde 1952 el Secretario General de conformidad con la decisión de la Asamblea General.

45. Se ha sugerido que el sistema propuesto llegaría a complicar las relaciones jurídicas, pero esas complicaciones no serían mayores que las que se ocasionarían si los Estados interesados concertasen una serie de tratados bilaterales, a lo cual tienen perfecto derecho. En cualquier caso, el temor a complicaciones administrativas no debe impedir a la Comisión proceder de acuerdo con el principio *pacta sunt servanda*.

46. Sólo en casos muy excepcionales puede la aceptación por un Estado de las reservas formuladas por otro afectar en algún modo a los intereses de terceras partes. En el caso de la Convención de Ginebra sobre la pesca de 1958, mencionada por el Sr. Gros en la sesión anterior, se incluyeron de hecho disposiciones estipulando expresamente que las reservas no serían permisibles. La regla supletoria que formule la Comisión no impedirá que se sigan incluyendo en los tratados cláusulas de ese tipo en casos similares.

47. El Sr. Briggs ha sugerido que la aceptación de las reservas se decida por un voto de mayoría de las partes. Contra ese sistema se puede alegar que a menudo la reserva que se formula sólo interesa a los dos Estados y es prácticamente indiferente para todos los demás. Por ejemplo, en cualquier tratado multilateral en que participe la Argentina, dicho país formula siempre una reserva relativa a la aplicación de sus disposiciones a las Islas Malvinas. La mayoría de los Estados no tienen nada que oponer a esa reserva puesto que no les afecta. Evidentemente, no cabe pretender que una mayoría de dos tercios de los Estados interesados pueda obligar al Reino Unido a aceptar esa reserva. La cuestión debe ser resuelta en cualquier caso entre el Estado que formula la reserva y el que se opone a ella. Al examinar el apartado b) del párrafo 4 del artículo 13, la Comisión ha aprobado disposiciones según las cuales el Estado que se opone no mantendrá relaciones convencionales con el Estado que se adhiere a cuya adhesión se ha opuesto, y ha aceptado la propuesta del Sr. Ago de que la aplicación de esa regla sea facultativa para el Estado que se opone ⁷.

48. Por lo que respecta a las reservas, la situación es similar a la de la adhesión; apoya por tanto la sugestión del Sr. Tunkin de que el Estado que formula la reserva y el que se opone a ella puedan optar sin embargo por mantener relaciones convencionales.

49. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice que responderá a las observaciones de sus colegas, no sólo como Relator Especial sino también como miembro de la Comisión.

50. Algunos han elogiado la forma progresiva en que ha atacado el problema de las reservas. En realidad, su intención ha sido simplemente recoger los usos existentes y presentar propuestas que resulten aceptables para los Estados.

51. Algunos miembros de la Comisión han manifestado que su opinión es ahora distinta de la que sustentaban en 1951. Si él hubiera pertenecido a la Comisión en 1951, su opinión habría sido muy similar a la que el Sr. Amado manifestó entonces. Es preciso, sin embargo, tener en cuenta la evolución posterior, que tiende a delimitar los principios tradicionales de la integridad del tratado y de la unidad de su régimen jurídico.

52. Los usos de los Estados en materia de convenciones multilaterales han evolucionado desde 1951 hacia un sistema parecido al latinoamericano. Sin embargo, la Asamblea General no se ha manifestado todavía a ese respecto y se ha limitado a recomendar al Secretario General en sus resoluciones 598 (VI) y 1452 (XIV) B, que comunique los documentos concernientes a reservas u objeciones « sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos de esos documentos ». Ese es el sistema que se ha venido siguiendo invariablemente desde 1952, pero el documento de Secretaría *Summary of the Practice of the Secretary-General* (ST/LEG/7) demuestra que cuando el Secretario General transmite el texto de documentos relativos a reservas, se señala a qué adhesiones o ratificaciones se ha formulado alguna reserva, con el fin de contar las adhesiones o ratificaciones que son

⁶ *Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion*: C.J. Reports 1951, pág. 22.

⁷ 650.ª sesión, párr. 46.

necesarias para poner en vigor el tratado. Ello constituye un indicio de que la Asamblea General está empezando a seguir un sistema parecido al latinoamericano. En los debates que celebró la Asamblea General en 1951 y en 1959 se manifestó también la misma tendencia.

53. Ha formulado sus propuestas procurando atenerse a la realidad. La materia es importantísima; en una ocasión anterior, la Comisión intentó ya codificar los principios pertinentes pero sus propuestas no fueron aceptadas. Causaría perjuicios considerables el hecho de que se rechazara el proyecto de artículos que la Comisión prepara en 1962 porque los Estados considerasen inaceptables sus artículos sobre reservas. Ello significaría la continuación del sistema actual de libertad en materia de reservas. Si, por otra parte, la Comisión diese aclaraciones por lo que respecta a la formulación de reservas, contribuiría notablemente al mejoramiento de la situación existente.

54. Sus propuestas no siempre responden a sus propias ideas sobre lo que es teóricamente mejor en materia de reservas, sino que constituyen un intento de formular un conjunto de disposiciones que puedan ser aceptadas por los Estados.

55. A pesar de que se haya sugerido lo contrario, cree que en la Comisión ha habido una división respecto a sus propuestas. Algunos de sus miembros han aprobado expresamente la idea general a que éstas responden. El Sr. Tsuruoka, el Sr. Ago, el Sr. Briggs y el Sr. Gros han manifestado por otra parte la inquietud que les produce un sistema excesivamente flexible y propicio a las reservas, en el que se sacrifica la unidad del régimen jurídico de los tratados en interés de la universalidad de los mismos.

56. En vista de esta divergencia de opiniones, cabe suponer que el mismo desacuerdo se manifieste en la Asamblea General a propósito de los artículos sobre reservas; la Comisión debe tener muy presente la necesidad de evitar que, como resultado, quede rechazado su proyecto de artículos. Después de la adhesión, las reservas constituyen la materia en que la Comisión podría hacer una contribución más eficaz al derecho de los tratados en caso de que se aprobase el proyecto de artículos.

57. Lo que tiene que decidir principalmente la Comisión es si en sus disposiciones sobre reservas a los tratados multilaterales generales ha de presentar un sistema latinoamericano modificado. El sistema hay que adoptarlo en su totalidad. A este respecto son muy importantes las disposiciones del párrafo 1 del artículo 17. Si la Comisión admitiese un gran margen de libertad en materia de reservas, debería aceptar también el principio de que, cuando una reserva esté expresamente prohibida o implícitamente excluida por el tratado mismo, habrá que respetar la prohibición o la exclusión. Ese principio ha sido aceptado por todos los miembros de la Comisión y constituye un importante punto de partida; la libertad de formular reservas se aplica sólo en los casos en que no es aplicable el párrafo 1 del artículo 17.

58. Otra cuestión es la suscitada por el Sr. Ago, quien admite la utilidad del criterio de la compatibilidad

establecido en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 17, pero concede más importancia a la intención de los Estados que en principio negociaron el tratado. Dicha intención queda parcialmente comprendida en la frase « el Estado deberá tener en cuenta la compatibilidad de la reserva con el objeto y propósito del tratado »; el objeto del tratado y su compatibilidad con la reserva se determinan en gran parte por referencia a la intención de los Estados negociadores.

59. Sin embargo, el Sr. Ago desea ir todavía más allá indagando cuál era la posición de los Estados que inicialmente negociaron el tratado en cuanto a la formulación de reservas al mismo. Si los negociadores establecieron de común acuerdo disposiciones expresas sobre reservas, su intención es evidente, pero cuando en las negociaciones no se logró establecer dichas disposiciones expresas, es difícil deducir la intención común de las partes en materia de reservas. Un ejemplo de las dificultades que podrían plantearse a este respecto, lo constituye el Tratado del Antártico firmado en Washington el 1.º de diciembre de 1959. Dicho Tratado está abierto a la adhesión de gran número de Estados; contiene un artículo XII sobre modificaciones y enmiendas, pero nada sobre reservas. Es dudoso que de ello pueda deducirse la imposibilidad de formular reservas a ese tratado.

60. El Sr. Rosenne ha sugerido la conveniencia de introducir en los artículos 18 y 19 el criterio de la compatibilidad en materia de reservas, indicando que en ese caso sería lógico ampliarlo al consentimiento y a las objeciones a las reservas. Personalmente no se ha decidido a proponer esa ampliación porque los Estados están siempre en libertad de aceptar o rechazar una reserva sin aplicar el criterio de la compatibilidad. La cuestión no tiene una gran importancia práctica, porque todo Estado que desee oponerse a una reserva dirá invariablemente que ésta es incompatible con la esencia misma del tratado.

61. El verdadero problema para la Comisión es el de decidir si en materia de reservas establece disposiciones inspiradas en el sistema latinoamericano, que deja la decisión a cada Estado, o si establece un sistema en el que haya alguna forma de decisión colectiva sobre su aceptabilidad.

62. Ha estudiado la posibilidad de introducir un sistema en el que la admisibilidad de las reservas, cuando se tratase de una convención redactada en una conferencia internacional, se determinase por decisión de una mayoría de dos tercios de los Estados interesados, o bien por decisión del órgano competente de la organización internacional con cuyos auspicios se hubiera preparado el tratado; en ese último caso, habría que formular la regla de la manera indicada por el Sr. Yasseen. La Comisión podría naturalmente formular a ese respecto una propuesta *de lege ferenda* pero no recomienda que se proceda de este modo. La razón en que se basa para ello es que, si bien es cierto que ahora es frecuente en la práctica seguir el procedimiento de la decisión colectiva por lo que respecta a la adhesión, hay muy pocos indicios de que el mismo procedimiento se siga para la aceptación de reservas. La mayoría de los casos que podrían citarse como ejemplo se refieren a instrumentos constitucionales de organizaciones inter-

nacionales, que son una categoría especial ; por el contrario, hay muy pocas convenciones multilaterales que admitan el sistema de las decisiones colectivas por lo que respecta a la aceptación de reservas.

63. El Sr. AMADO no cree que presentase grandes inconvenientes considerar el tratado multilateral como varios acuerdos bilaterales ; le gustaría conocer la opinión del Sr. Ago y del Sr. Gros a ese respecto.

64. Está de acuerdo en que teóricamente es deseable establecer principios uniformes que sean aceptados universalmente. Sin embargo, los Estados no renunciarán fácilmente a su libertad de formular reservas, derecho emanado de su soberanía, simplemente en beneficio de la uniformidad.

65. Como ha señalado el Relator Especial, la Comisión se encuentra ante la alternativa de admitir las realidades de la situación contemporánea o encerrarse en su torre de marfil. La Comisión no ganará nada ante la Asamblea General si no le presenta propuestas que puedan obtener la aceptación de los Estados.

66. El Sr. de LUNA dice, refiriéndose al apartado c) del párrafo 4 del artículo 19, que sustenta la misma opinión que el Sr. Tunkin y el Sr. Rosenne, es decir, que nada impide al Estado que se opone a la reserva admitir que el tratado entre parcialmente en vigor en sus relaciones con el Estado que la formuló. Sugiere, por tanto, como solución de transacción, que después de « entre el Estado que oponga la objeción y el Estado autor de la reserva » se añadan las palabras « salvo declaración expresa en contrario del Estado que oponga la objeción ».

67. El criterio de la compatibilidad establecido en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 17 parece lógico en principio, pero desgraciadamente sería inaplicable a falta de una autoridad que decida sobre el problema de la compatibilidad. Sugiere por tanto que el contenido del apartado a) del párrafo 2 se traslade al comentario.

68. Cree que, en caso de conservarse en el artículo 17 la disposición del apartado a) del párrafo 2, serían muy convincentes los argumentos del Sr. Rosenne a favor de la inclusión de una disposición similar en los artículos 18 y 19. Personalmente está de acuerdo con el Sr. Tunkin en que los Estados deben quedar en libertad de decidir si una reserva determinada es compatible con el objeto y finalidad del tratado, y de aceptarla o rechazarla según proceda.

69. El Sr. CADIEUX se inclina por un sistema flexible en materia de reservas, sistema que sería especialmente útil en federaciones como el Canadá. El Gobierno Federal de su país se ve a menudo obligado a formular reservas cuando firma un tratado porque ha de tener en cuenta los derechos de los Estados que componen la federación. A menos que se adopte un sistema flexible, los países como el Canadá se encontrarán en la imposibilidad de participar en muchos tratados multilaterales que sería conveniente que firmasen.

70. Los intereses de los nuevos Estados independientes aconsejan también un sistema flexible. Esos Estados no tienen todavía la certeza de cual será su evolución en el orden social, ni saben tampoco cuáles

serán sus futuros intereses económicos. Las reservas les ofrecen un medio de prevenir su situación futura, por lo que el sistema flexible sería para ellos muy útil.

71. Se refiere a las palabras del Relator Especial a propósito de que la Comisión se encuentra ante la alternativa de elegir entre el llamado sistema latinoamericano y un sistema que admita alguna forma de decisión colectiva, y dice que es interesante el hecho de que el Relator Especial haya excluido la posibilidad de adoptar la regla de la unanimidad. Por su parte, está dispuesto a aceptar las propuestas del Relator Especial.

72. El Sr. AGO dice que no hay inconveniente alguno en que se concierten una serie de acuerdos bilaterales en las circunstancias indicadas por el Sr. Amado si las materias a que se refieren son de importancia secundaria ; lo contrario ocurriría, sin embargo, si las cuestiones objeto de esos acuerdos constituyesen lo esencial del tratado multilateral.

73. Sería peligroso dejar que cada Estado decidiese individualmente acerca de la aceptación de reservas. En un tiempo en que cada vez es más intensa la codificación de los principios generales de derecho internacional mediante convenciones multilaterales, el sistema indicado permitiría que cada Estado decidiese separadamente si un principio es esencial o no en relación con el derecho internacional relativo a una materia determinada.

74. El Relator Especial ha indicado, con razón, que sus propuestas son compatibles con las que ha aceptado la Comisión respecto a la adhesión, es decir, que la cuestión de la admisibilidad de una adhesión se decidirá ulteriormente por la autoridad competente para admitir adhesiones en la etapa anterior. Por su parte, y ésta es su respuesta al Sr. Amado, no cree que la Comisión perdiese nada en el concepto de la Asamblea General si sugiriese que ésta fuese competente cuando se trate de determinar la finalidad esencial de un tratado multilateral concertado con los auspicios de la Asamblea misma. Es, naturalmente, imprescindible que las partes en esos tratados expresen sus intenciones claramente incluyendo en ellos una disposición relativa expresamente a las cláusulas que admiten reservas.

75. Pero cuando el tratado no contiene disposición alguna al efecto, es posible dejar sistemáticamente que la Asamblea General decida si la cláusula del tratado a que se refiere la reserva es esencial o no. Los Estados a quienes se invita a participar en conferencias de codificación son casi siempre todos los que componen las Naciones Unidas. Es por tanto posible que quien decida acerca de la aceptación de reservas sea un órgano muy similar al que aprobó el tratado mismo.

76. El Presidente ha sugerido que es poco probable que el problema se plantee en el futuro porque los tratados contendrán cláusulas acerca de reservas. La experiencia demostró, en el caso de la Conferencia de Ginebra de 1958 sobre el Derecho del Mar, lo difícil que es ponerse de acuerdo sobre cuáles son las cláusulas del tratado a las que no se admitirán reservas. No conviene por tanto en absoluto dar a los Estados libertad completa en materia de reservas cuando el tratado no contiene disposición alguna a ellas relativa ; en efecto,

con ese sistema serían menores las posibilidades de acuerdo acerca de una cláusula sobre reservas. Los negociadores no se esforzarían mucho en llegar a un acuerdo durante las deliberaciones porque sabrían que el fracaso a ese respecto dejaría a los Estados en libertad de formular todas las reservas que quisiesen.

77. El Sr. VERDROSS se inclina por el sistema que ha propuesto el Relator Especial. Está también de acuerdo con él en que lo principal es que la Comisión decida si ha de dejarse a cada Estado que decida sobre la aceptación de reservas, o si ello ha de ser objeto de alguna forma de decisión colectiva.

78. Puesto que la Comisión aprobará el proyecto de artículos sólo en primera lectura, quizá se pudiera ofrecer a los Estados textos para que eligiesen, según se ha hecho en ocasiones anteriores. Con ello los Estados podrían elegir entre el sistema latinoamericano y el sistema propuesto por el Sr. Ago. Una vez observadas las reacciones de los Estados y las preferencias que expresasen por uno u otro sistema, la Comisión podría adoptar su decisión en segunda lectura.

Se levanta la sesión a las 13. 5 horas.

654.ª SESIÓN

Miércoles 30 de mayo de 1962, a las 10 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Derecho de los tratados (A/CN.4/144 y Add.1) (continuación)

[Tema 1 del programa]

ARTÍCULO 17 (PODER PARA FORMULAR Y RETIRAR RESERVAS); ARTÍCULO 18 (EL CONSENTIMIENTO A LAS RESERVAS Y SUS EFECTOS); ARTÍCULO 19 (LA OBJECCIÓN A LAS RESERVAS Y SUS EFECTOS) [continuación]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir su examen de los tres artículos sobre las reservas.
2. El Sr. YASSEEN dice que el examen de los artículos sobre las reservas ha demostrado que hay gran coincidencia de pareceres en muchos puntos fundamentales.
3. En cuanto a la libertad de formular reservas, hay acuerdo en que es necesario observar en primer lugar y conformarse con las disposiciones del tratado. Sin embargo, se ha suscitado una controversia sobre el problema planteado cuando el tratado no contiene disposiciones sobre las reservas.
4. Algunos miembros de la Comisión interpretan el silencio del tratado en el sentido de que son admisibles

las reservas. Esa interpretación puede resultar acertada en algunos casos, pero no en todos. La respuesta depende de cómo se interprete la intención de las partes lo que supone un examen no sólo de la letra del tratado, sino también de la voluntad de quienes hayan redactado el texto.

5. En cuanto a la cuestión de los efectos de la aceptación de una reserva, existe acuerdo sobre la cuestión esencial de que la aceptación hace entrar en vigor, entre el Estado que formula la reserva y el Estado que la acepta, todas las disposiciones del tratado excepto aquellas a las que se refiere la reserva.

6. En cuanto a las objeciones a las reservas, se acordó que el Estado que formula una objeción tiene derecho a no considerar al Estado que formula la reserva como parte en el tratado. Sin embargo, ello no es así en todos los casos. Puede ocurrir que el Estado que formula la objeción no tenga la intención de impedir que el Estado que opone la reserva sea parte en el tratado. Es necesario examinar el documento que contiene la objeción con el fin de determinar cuáles son las intenciones del Estado que formula la objeción. Sin embargo, en el caso de que se oponga una objeción categórica, sin ninguna indicación de que el Estado que la formula no desea impedir que el Estado que hace la reserva sea parte en el tratado, ese Estado no puede ser considerado como parte en el tratado.

7. La única cuestión importante en que hay una división de opiniones es la de qué sistema recomendará la Comisión para la aceptación de reservas a un tratado multilateral general. Algunos miembros son partidarios de un sistema basado en la práctica latinoamericana, según la cual una objeción a una reserva no impide que el Estado que formula la reserva sea parte en el tratado en relación con aquellos Estados que han aceptado la reserva. Otros miembros estiman que la admisión del Estado que formula la reserva como parte en el tratado debe ser objeto del consentimiento unánime de los Estados parte, o del consentimiento de una mayoría concreta de esos Estados. En vista de esa división de opiniones, convendría que la Comisión aprobase la sugerencia del Sr. Verdross y dejase a los Estados mismos la decisión sobre el asunto.

8. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el Sr. Yasseen en que no hay gran diferencia de opiniones en la Comisión sobre los principales puntos de los artículos 17, 18 y 19, y que, en consecuencia, podrían remitirse en seguida esos artículos al Comité de Redacción.

9. La Comisión podría perfectamente adoptar el principio enunciado en el artículo 17 de que los Estados tienen libertad de formular reservas, salvo que el tratado lo excluya implícitamente. El Comité de Redacción podría acortar el artículo; en especial, no ve la necesidad de aludir a la práctica de las organizaciones internacionales, que puede ser diferente de una organización a otra.

10. La Comisión también podría adoptar el principio rector que preside todos los párrafos del artículo 18, excepto el párrafo 4, que está en contradicción con ese principio. No ve razón alguna para establecer una distinción entre los tratados celebrados en una organización